

declarar y declaramos no ajustada a derecho la referida denegación y, consecuentemente, la anulamos; todo ello con condena a la Administración demandada a abonar las diferencias mencionadas, y sin hacer especial imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia de la que se llevará certificación a autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos (firmada y rubricada).»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada condena.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 9 de marzo de 1983.—P. D., el Subsecretario, Liborio Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Administración de Justicia.

## MINISTERIO DE DEFENSA

11651

*ORDEN 111/10022/1983, de 3 de marzo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional dictada con fecha 13 de julio de 1982 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Eusebio Zamorano Castilla, Brigada de Aviación, Escuela de Especialistas Mecánicos de Mantenimiento de Avión.*

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Eusebio Zamorano Castilla, Brigada de Aviación, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra las resoluciones del Ministerio de Defensa de 20 de diciembre de 1979 y 7 de mayo de 1980, se ha dictado sentencia con fecha 13 de julio de 1982, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos la causa de inadmisibilidad propuesta por el representante de la Administración y, desestimando a su vez el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor Corujo Pita, en nombre y representación de don Eusebio Zamorano Castilla, contra las resoluciones del Ministerio de Defensa de veinte de diciembre de mil novecientos setenta y nueve y siete de mayo de mil novecientos ochenta, declaramos las mismas ajustadas a derecho; sin expresa imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 3 de marzo de 1983.—P. D., el Secretario general para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Michavila Pallarés.

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA).

11652

*ORDEN 111/10028/1983, de 3 de marzo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid, dictada con fecha 11 de octubre de 1982, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña María del Pilar González de Aledo Rittwagen, ex Auxiliar Administrativo de 2.ª de la Maestranza de la Armada.*

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, entre partes, de una, como demandante, doña María del Pilar González de Aledo Rittwagen, ex Auxiliar Administrativo, quien postula por sí misma, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra la resolución de 8 de mayo de 1979, del Almirante Jefe del Departamento de Personal, se ha dictado sentencia con fecha 11 de octubre de 1982, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña María del Pilar González de Aledo Rittwagen contra la resolución de ocho de mayo de mil nove-

cientos setenta y nueve, dictada por el Almirante Jefe del Departamento de Personal del Ministerio de Defensa, confirmando la resolución del Director de Reclutamiento y Dotaciones del Cuartel General de la Armada, por la que se denegó la petición de la demandante de que se dejase sin efecto su baja en la Armada, y, en consecuencia, debemos anular y anulamos dichas resoluciones por ser contrarias al ordenamiento jurídico, del mismo modo debemos declarar y declaramos la nulidad de pleno derecho de la Orden ministerial de trece de octubre de mil novecientos cincuenta y nueve, por la que se decretó la baja de la recurrente en la Armada, debiendo reconocerse a la recurrente los derechos de toda índole que desde su ingreso hasta la actualidad le corresponden. Sin costas.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 3 de marzo de 1983.—P. D., el Secretario general para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Michavila Pallarés.

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA)

11653

*ORDEN 111/10030/1983, de 3 de marzo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 25 de octubre de 1982, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Carid Balvis, Comandante de Ingenieros.*

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes, de una, como demandante, don José Carid Balvis, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra acuerdos del Consejo Supremo de Justicia Militar de 7 de marzo de 1979, se ha dictado sentencia con fecha 25 de octubre de 1982, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Carid Balvis contra el acuerdo de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar de siete de marzo de mil novecientos setenta y nueve, declaramos nulo tal acuerdo por ser contrario al ordenamiento jurídico, y, en consecuencia, disponemos que la citada Sala de Gobierno debe hacer nuevo señalamiento de haberes pasivos al actor, computándole a efectos del regulador el trienio de Alférez en la proporcionalidad diez, conforme lo venía percibiendo antes de su retiro, sin expresa imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa", definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 3 de marzo de 1983.—P. D., el Secretario general para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Michavila Pallarés.

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.

11654

*ORDEN 111/10031/1983, de 3 de marzo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 22 de julio de 1982, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Desamparados Bonet Alcón.*

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, entre partes, de una, como demandante, doña Desamparados Bonet Alcón, quien postula por sí misma, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra acuerdo del excelentísimo señor Ministro de Defensa de 11 de enero de 1980, se ha dictado sentencia con fecha 22 de junio de 1982, cuya parte dispositiva es como sigue: